



**Informe 3/2008, de 7 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña.**

**Asunto: Composición y funcionamiento de las mesas de contratación.**

## **ANTECEDENTES**

I. El Departamento de Economía y Finanzas ha solicitado el informe de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la procedencia o improcedencia de las interpretaciones que, sobre las dudas que se plantean en las mesas de contratación, efectúa su **Dirección de Servicios**, de acuerdo con la siguiente transcripción literal:

*"1º) Esta Dirección de Servicios considera que es obligatorio que un letrado y un interventor formen parte de la mesa -designada por el órgano de contratación, como prevé el propio art. 81.1 TRLCAP-, pero que esta obligatoriedad es un requisito para su creación, no para su funcionamiento. Todos los vocales, con sus funciones específicas, tienen el mismo rango, y no hay ninguna disposición, ni en el TRLCAP ni en las normas de procedimiento -la Ley 13/1989 y la Ley 30/1992-, que subordine el quórum de la mesa, -cuya determinación es estrictamente cuantitativa-, o la validez de sus actos, a la presencia del letrado y del interventor. En consecuencia, si en una sesión de la mesa está ausente uno u otro, pero se reúne el quórum previsto en el art. 32 de la Ley 13/1989, entendemos que el órgano se ha constituido válidamente y que sus actos son igualmente válidos."*

*2º) Por aplicación de los mismos preceptos procedimentales, esta Dirección de Servicios entiende que, si no se han designado suplentes para los miembros de la mesa de contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares no dispone otra cosa, tanto el interventor como el letrado, en caso de ausencia del presidente o del secretario, los pueden sustituir, si cumplen las condiciones previstas en el art. 28 de la Ley 13/1989, es decir, si son los vocales más antiguos -o de más edad- o los más jóvenes."*

El artículo 4.1 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, establece que esta Junta informa sobre las cuestiones que, en materia de contratación, le sean sometidas por los diferentes departamentos de la Generalitat. Por su parte, el artículo 11.3 del mismo Decreto atribuye a la Comisión Permanente la aprobación de los informes correspondientes.

## **CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

### **I. Régimen jurídico aplicable a las mesas de contratación**

Con el fin de dar respuesta a la consulta planteada hay que analizar, en primer lugar, la regulación de las mesas de contratación contenida en normativa estatal de contratos. Este análisis hay que efectuarlo desde la perspectiva de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, (en adelante, LCSP), que ya ha entrado en vigor y que



contiene una regulación de las mesas de contratación muy parecida a la recogida en el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante, TRLCAP) -vigente en el momento en que se efectúa la consulta y al cual se alude en la misma. Asimismo, también hace falta efectuar el análisis de la regulación de las mesas de contratación contenido en la normativa estatal de contratos desde la perspectiva del Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (en adelante, RGLCAP).

Esta normativa estatal, aunque es de carácter no básico, resulta de aplicación en el ámbito de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con la disposición final séptima de la LCSP y con la disposición final primera del RGLCAP, vista la falta de regulación específica al respeto a nivel autonómico<sup>1</sup>.

Respecto a la regulación de las mesas de contratación contenida en la LCSP, el artículo 295 prevé lo siguiente:

*“Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación.*

*2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.*

*3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario.”*

Los artículos 296 y 297 de la LCSP regulan ciertas especialidades en relación con la composición de las mesas de contratación del diálogo competitivo y del sistema estatal de contratación centralizada, respectivamente. En este sentido, prevén que la mesa para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo se tiene que constituir con la composición señalada en el artículo 295, anteriormente transcrito, con la

---

<sup>1</sup> La misma consideración hacía falta efectuar en relación con la regulación de las mesas de contratación contenida en el TRLCAP, que también tenía carácter de regulación no básica de conformidad con su disposición final primera. Esta Junta Consultiva analizó en el Informe 3/2002, de 25 de abril, el alcance de la supletoriedad de los artículos no básicos del RGLCAP.



incorporación de personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo, designadas por el órgano de contratación, cuyo número tiene que ser igual o superior a un tercio de los componentes de la mesa y que participan en las deliberaciones con voz y voto; y que el órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada tiene que estar asistido por una mesa de contratación interdepartamental, cuya composición se tiene que determinar por reglamento.

El artículo 298 de la LCSP dispone que en los concursos de proyectos la mesa de contratación se constituye en jurado de los concursos y prevé que tiene que incorporar hasta cinco personalidades de notoria competencia en el ámbito relevante, designadas por el órgano de contratación, que puedan contribuir de forma especial a evaluar las propuestas presentadas, que tienen que participar en las deliberaciones con voz y voto; que los miembros del jurado tienen que ser personas físicas independientes de las personas participantes en el concurso; y que cuando se exija a los candidatos poseer una determinada calificación o experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del jurado tienen que tener la misma u otra de equivalente.

La disposición adicional segunda, relativa a las normas específicas de contratación en las Entidades Locales, dispone en su apartado 10 que la mesa de contratación tiene que estar presidida por un miembro de la corporación o un funcionario o funcionaria de esta corporación y que tienen que formar parte, como vocales, el secretario o secretaria o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el interventor o interventora, como también los otros que designe el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la corporación, o miembros electos de ésta, sin que su número, en total, sea inferior a tres; que actúa como secretario o secretaria un funcionario o funcionaria de la corporación; y que en las Entidades Locales Municipales se puede integrar en la mesa personal al servicio de las correspondientes diputaciones provinciales o comunidades autónomas uniprovinciales.

La última previsión contenida en la LCSP es la prevista en la disposición adicional vigésima, relativa a la composición de las mesas de contratación de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Se prevé en este caso la posibilidad de establecer por reglamento los supuestos en qué tienen que formar parte de la mesa de contratación letrados o letradas que estén habilitados o habilitadas específicamente para ello en sustitución de los que tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.

A diferencia de lo que sucedía con el TRLCAP, la LCSP no contiene otras previsiones expresas sobre las mesas de contratación, diferentes de las ya indicadas y, respecto a las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en relación con el examen de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, se refiere, en términos generales, a "el órgano competente para la valoración de las proposiciones".<sup>2</sup>

<sup>2</sup> En cambio, el TRLCAP contenía diversas menciones sobre las actuaciones que tenía que llevar a cabo la mesa de contratación en el marco de sus funciones y, en concreto, hacía referencia a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma, a la apertura en acto público de las proposiciones admitidas y a la propuesta de adjudicación que efectuaba la mesa en las subastas



Respecto a la regulación de las mesas de contratación contenida en el RGLCAP, su artículo 79<sup>3</sup> establece lo siguiente:

*"1. En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la mesa de contratación estará constituida por un presidente, un mínimo de cuatro vocales y un secretario designados por el órgano de contratación, el último entre funcionarios del mismo o, en su defecto, entre el personal a su servicio. Entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor.*

*2. La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de contratos. Si es permanente o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su composición deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado".*

---

(artículo 82) y en los concursos (artículo 88); a la propuesta de adjudicación que, en su caso, hacía la mesa en los procedimientos negociados (artículo 92); a la acomodación necesaria de la adjudicación del contrato a la propuesta de la mesa, excepto en los casos en que se hubiera efectuado con infracción del ordenamiento jurídico o que el órgano de contratación presumiera fundadamente que la proposición no podría ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias (artículo 83); y a la selección previa de las ofertas más ventajosas para la Administración y selección posterior entre éstas de la que tuviera que ser propuesta como adjudicataria, en el procedimiento para la contratación de equipos o sistemas para el tratamiento de la información (artículo 184).

<sup>3</sup> En el Informe 3/2002, de 25 de abril, citado antes, en concreto, esta Junta Consultiva decía lo siguiente:

*"El artículo 79, por remisión del artículo 81 del texto refundido, regula la composición de la mesa de contratación para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades públicas estatales.*

*En esta línea, el artículo 81 del texto refundido, párrafo segundo, establece que en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, será preceptiva la presencia de un asesor jurídico y un interventor en las mesas de contratación.*

*Tanto en un caso como en el otro se trata de normas organizativas internas y, por lo tanto, la Administración de la Generalidad no está vinculada por estas disposiciones, ni respecto al número de vocales ni a la tipología, y en uso de su potestad de autoorganización puede establecer unos órganos diferentes y una composición diferente en la prevista a las normas estatales, con carácter general para todos los departamentos, mediante decreto del Gobierno. Por lo tanto, estos preceptos no tienen una aplicación supletoria inmediata. Tampoco se podría aplicar la sustitución de órganos, ya que no hay referencias a órganos concretos.*

*No obstante, hay que tener en cuenta que, a falta de una regulación específica, el artículo 81.1 del texto refundido, primer párrafo, es de aplicación supletoria, por lo tanto, la mesa de contratación existe y es un órgano necesario en el procedimiento de contratación, por lo cual sería necesario fijar la composición por decreto del Gobierno de la Generalidad."*



Las otras previsiones que se contienen en el RGLCAP sobre las mesas de contratación hacen referencia a sus actuaciones relativas a la calificación de la documentación presentada y a su intervención en relación con los defectos u omisiones subsanables (artículo 81); a la valoración de los criterios de selección de las empresas (artículo 82); a la apertura de las proposiciones (artículo 83); al rechazo de las proposiciones mediante resolución motivada (artículo 84); a la valoración de las ofertas como desproporcionadas considerando la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada (artículo 85); a la valoración de las proposiciones formuladas por diferentes empresas que pertenezcan a un mismo grupo (artículo 86); y a la concreción de la proposición de precio más bajo o económicamente más ventajosa sobre la cual tiene que formular la propuesta de adjudicación del contrato, a la invitación a los licitadores y licitadoras para exponer observaciones contra este acto y a la devolución de documentación (artículo 87).

El repaso efectuado en relación a la regulación de las mesas en la normativa de contratos permite constatar que, si bien se establecen las reglas generales de su composición, **no existen previsiones específicas sobre los quórum de presencia o de decisión**, lo que obliga a analizar lógicamente cuál es la regulación general de los órganos colegiados contenidas en las leyes administrativas generales.

En Cataluña, este análisis nos tiene que llevar, en primer lugar, a la consideración de las normas contenidas en el capítulo VI del título I de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

En este sentido, el artículo 27 de la misma Ley 13/1989, de 14 de diciembre, dispone que: *"Los órganos colegiados, cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se rigen por las normas que los crean, las cuales, en todo caso, tienen que establecer la composición y las funciones"*. El mismo precepto establece que: *"Si no hay normas específicas de funcionamiento, los órganos colegiados se rigen por las normas contenidas en este capítulo"*.

En el mencionado capítulo, relativo al funcionamiento de los órganos colegiados, se contiene, entre otros aspectos y a los efectos que ahora interesan con el fin de dar respuesta a la consulta planteada, la regulación relativa al quórum de constitución de los órganos colegiados en primera y segunda convocatoria y al régimen de sustitución del presidente o presidenta y del secretario o secretaria del órgano, que acto seguido se analiza.

## **II. Constitución de las mesas de contratación y quórum de presencia**

El artículo 32 de la ya mencionada Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la administración de la Generalidad de Cataluña, establece que: *"En primera convocatoria, el quórum de constitución de los órganos colegiados es el de la mayoría absoluta de los componentes; en segunda convocatoria, el*



*quórum se alcanza con la asistencia de una tercera parte de los miembros, con un mínimo de tres".*

Aunque resulta evidente, la aplicación sin ningún tipo de matización de este precepto a la consulta objeto de este Informe supondría que la mesa de contratación pudiera quedar válidamente constituida en segunda convocatoria con la asistencia únicamente de tres miembros, sin que ninguno de éstos tuviera que reunir el requisito de ser un funcionario o funcionaria que tuviera atribuido legalmente o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación, o de ser un interventor o interventora y sin la asistencia del presidente o presidenta y del secretario o secretaria, aunque respecto de estos dos últimos miembros su ausencia quedaría salvada por vía del régimen de sustitución a que se aludirá en el apartado siguiente de este Informe.

Ahora bien, la mesa de contratación, con la finalidad de poder seleccionar con objetividad e imparcialidad la mejor oferta y motivar su decisión, tiene una composición que responde a la de un órgano independiente e integrado por una mayoría de personas con calificación técnica y que, además, tienen que gozar de independencia respecto del órgano de contratación con el fin de garantizar aquella objetividad e imparcialidad.

En esta línea, el propio Tribunal Supremo ha manifestado que la configuración de la mesa de contratación como órgano de carácter técnico resulta tanto de las funciones que se le encomiendan como de su composición, en tanto que la normativa de contratos establece la exigencia que entre los vocales figuren un funcionario o funcionaria que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor o interventora. Más específicamente, el Tribunal Supremo ha afirmado que *"la intervención de la Mesa de contratación en el procedimiento afecta de manera fundamental a la formación de la voluntad del órgano de contratación, en tanto que la propuesta incluye la valoración de las proposiciones de los licitadores y, aunque no tenga carácter vinculante, constituye la motivación fundamental de la resolución de adjudicación cuando se acomoda a la propuesta y, en caso contrario, exige una motivación específica que justifique la razón de la adjudicación no conforme con la propuesta"* (Sentencia de 3 de noviembre de 2004 (RJ 2004\7222)).

Pues bien, uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar la calificación técnica y la independencia de la mesa de contratación es el de que figuren entre los vocales que tienen que constituir el órgano un funcionario o funcionaria de entre los que tengan atribuido legalmente o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor o interventora. Se trata, en ambos casos, de miembros que tienen atribuidas funciones específicas -en un caso de fiscalización y en el otro de asesoramiento- que, en esencia, tienen un carácter autónomo y sin relación jerárquica con el órgano de contratación.

Lógicamente sin embargo, esta garantía particular de calificación técnica y de imparcialidad no puede quedar circunscrita al momento de la constitución formal del órgano, como se apunta en el escrito de consulta, porque si fuera así perdería buena parte de su sentido. Piénsese sólo en el caso de la apertura en acto público de las proposiciones, en que la



presencia del interventor o la interventora y del asesor o asesora jurídico/a de la mesa puede resultar decisiva para garantizar la legalidad estricta del procedimiento y el asesoramiento inmediato en la resolución de eventuales incidencias, o en el caso de la formulación de la propuesta de adjudicación que, como antes se ha indicado, se convierte en fundamental para la decisión del órgano de contratación. En este sentido, la solución consistente en aplicar el régimen general de los órganos colegiados previsto en la mencionada Ley 13/1989, de 14 de diciembre, sin ningún matiz, parece contraria a la voluntad del legislador en materia de contratos, expresada tanto en la LCSP -como ya hacía en el anterior TRLCAP- como en el RGLCAP.

Por otra parte, si bien se puede afirmar la improcedencia de establecer una jerarquía entre los diferentes vocales, los cuales, tal como se indica en el escrito de consulta, *"con sus funciones específicas, tienen el mismo rango"*, eso no obsta para afirmar también que de la normativa de contratos se desprende la presencia obligada de los representantes de las funciones interventora y de asesoramiento jurídico a fin de que las mesas de contratación queden válidamente constituidas cada vez que se reúnan y eso porque, ante la opinión expresada en el escrito de consulta, esta Junta considera que la determinación del quórum de la mesa no es una cuestión estrictamente cuantitativa, justamente por la necesaria presencia del letrado o letrada y del interventor o interventora que tanto la LCSP como el RGLCAP se encargan de remarcar.

Por último, la aplicación del régimen general de constitución de los órganos colegiados chocaría también con la normativa específica reguladora de la función interventora, dado que el artículo 2 de la Ley catalana 16/1984, de 20 de marzo, del Estatuto de la función interventora, dispone que la Intervención General de la Administración de la Generalidad tiene, entre otras, la facultad de ser el centro de control interno de la Administración de la Generalidad y, como tal, le corresponde, de acuerdo con el artículo 3 del mismo texto legal y, entre otras funciones, *"asistir a las licitaciones que se hagan para la contratación de obras, la gestión de servicios públicos, los suministros, los arrendamientos y la adquisición y la alienación de bienes"*. Por su parte, el Decreto 133/1985, de 25 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento de la función interventora, prevé en su artículo 10 que *"En todas las licitaciones que se celebren para la contratación de obras, servicios públicos, suministros, arrendamientos, adquisición y alienación de bienes, tendrá que asistir el Interventor Delegado del Departamento u organismo autónomo correspondiente, o persona en la cual éste delegue. A estos efectos, le tendrán que ser notificados, con la antelación suficiente, la fecha y el lugar de la celebración de las licitaciones."*

A conclusiones similares lleva el análisis de la normativa específica aplicable a los servicios jurídicos de la Generalidad. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y el artículo 19 del Decreto 57/2002, de 19 de febrero, de modificación del Decreto 257/1997, de 30 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, corresponde a los abogados de la Generalidad el asesoramiento en derecho, entre otras cuestiones, sobre *"los contratos y los convenios administrativos, civiles, mercantiles y laborales que se tienen que otorgar"*.





En definitiva, y por las razones expresadas, esta Junta entiende que la presencia del representante de la intervención y de quien tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico del órgano de contratación, en tanto que responsables del ejercicio de unas funciones específicas que no pueden ser ejercidas por otros miembros de la mesa, es obligada para la válida constitución y posteriores actuaciones de las mesas de contratación y que, por lo tanto, no resulta de aplicación en este punto el régimen general supletorio de los órganos colegiados previsto en el artículo 32 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre.

### **III. Régimen de sustitución de los presidentes o presidentas y los secretarios o secretarías de las mesas de contratación**

El apartado 2 del artículo 28 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, prevé que: *"En casos de ausencia, de vacante o de enfermedad del presidente, lo sustituyen los vicepresidentes, según la orden de nombramiento; si no hay, el vocal más antiguo y, si dos o más vocales tienen la misma antigüedad, el vocal de más edad"*. El apartado 3 del mismo precepto dispone que: *"El secretario es sustituido por el vocal más joven"*.

Vista la falta de normativa específica al respecto, ¿este régimen de sustitución de miembros previsto con carácter general para todos los órganos colegiados resulta de aplicación a las mesas de contratación? Las características especiales que concurren en la composición y finalidades de las mesas de contratación permiten adelantar que aquella previsión general debe someterse a determinadas limitaciones y matices.

En primer lugar, el secretario o secretaria sustituto/a, además de reunir la condición prevista en el régimen general de sustitución del artículo 28 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre - esto es, la de ser el vocal o la vocal más joven-, tendrá que cumplir también el requisito de ser funcionario o funcionaria u *otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación*, de acuerdo con lo que disponen los artículos 295 de la LCSP y 79 del RGLCAP, y esta peculiaridad es relevante para el caso que se examina, como se verá más adelante.

En segundo lugar, si es el interventor o interventora o el letrado o la letrada quienes cumplen la condición de ser los vocales más antiguos o antiguas, de más edad o más jóvenes, se plantea la cuestión, a la que expresamente alude el escrito de consulta, de si pueden sustituir al presidente o presidenta o al secretario o secretaria en caso de ausencia. Con el fin de dar respuesta a esta cuestión hace falta analizar las funciones que la normativa atribuye a los cargos de presidente o presidenta y secretario o secretaria de los órganos colegiados y comprobar si su ejercicio es o no compatible con las funciones que el interventor o interventora y el letrado o letrada están llamados a desarrollar como miembros de la mesa de contratación.

Las funciones de los presidentes de las mesas de contratación especificadas en la normativa de contratos son las siguientes: ordenar la apertura de los sobres que contengan la documentación acreditativa de la personalidad jurídica, de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional o de la clasificación y de la declaración responsable de no





estar incurso en prohibición para contratar, y el resguardo acreditativo de la garantía provisional si ésta es exigible (arte 81 RGLCAP); manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de la causa o las causas de inadmisión de estas proposiciones y notificar el resultado de la calificación (arte 83.4 RGLCAP); y firmar el acta en que se refleja fielmente lo sucedido en el acto en el cual la mesa concreta la proposición sobre la cual formulará la propuesta de adjudicación del contrato (art. 87.3 RGLCAP).

Por otra parte, con carácter general y de acuerdo con el artículo 29 de la ya mencionada Ley 13/1989, de 14 de diciembre, corresponde al presidente o presidenta de un órgano colegiado asegurar el cumplimiento de las leyes y la regularidad de las deliberaciones, convocar las sesiones, fijar el orden del día y ordenar las deliberaciones y debates. Por último, de acuerdo con el artículo 33.1 de la misma Ley, en caso de empate, dirige el resultado de las votaciones el voto del presidente o presidenta.

Las funciones de los secretarios de las mesas, de acuerdo con el RGLCAP, son las siguientes: recibir la certificación relacionada de la documentación recibida, o de la ausencia de licitadores y licitadoras expedida por los jefes o las jefas de las oficinas receptoras (art. 80.5 RGLCAP); certificar la relación de documentos que figuren en cada uno de los sobres que contengan la documentación acreditativa de la personalidad jurídica, de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional o de la clasificación y de la declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar, y el resguardo acreditativo de la garantía provisional si ésta es exigible (arte 81 RGLCAP); y firmar el acta que refleja fielmente lo que ha sucedido en el acto en el cual la mesa concreta la proposición sobre la cual formulará la propuesta de adjudicación del contrato (art. 87.3 RGLCAP).

Desde la perspectiva general antes apuntada y de acuerdo con el artículo 29 de la ya mencionada Ley 13/1989, de 14 de diciembre, corresponde al secretario o secretaria de un órgano colegiado levantar acta de las reuniones y extender los certificados pertinentes.

Como hemos indicado, sin embargo, el análisis de las funciones y de las atribuciones de los presidentes o presidentas y secretarios o secretarias de los órganos colegiados se tiene que completar con la de las funciones y estatuto conferido a interventores e interventoras y asesores y asesoras jurídicos/as. Con respecto al interventor o interventora, la antes mencionada Ley 16/1984, de 20 de marzo, del Estatuto de la función interventora, prevé que todos los actos, los documentos y los expedientes de la Administración de la Generalidad de los cuales puedan derivar derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondo o de valores tienen que ser intervenidos de acuerdo con lo que establecen la Ley de finanzas públicas de Cataluña, el propio estatuto de la función interventora y otras disposiciones complementarias (artículo 1); y que el ejercicio de la función interventora corresponde a la Intervención General de la Administración de la Generalidad, que tiene que actuar con plena autonomía con respecto a los órganos y las entidades sujetas a fiscalización (artículo 2).

Con respecto al letrado o letrada, el artículo 2.3 de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña,



establece que los abogados y abogadas de la Generalidad integran el Gabinete Jurídico y están sometidos en su actuación a la dirección y a la coordinación jurídicas del director o directora del Gabinete, que es quien puede darles las instrucciones que hagan falta para el funcionamiento coordinado de los servicios. Por su parte, el Reglamento de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad, aprobado por Decreto 257/1997, de 30 de septiembre, remarca que los abogados y abogadas de la Generalidad tienen garantizada su autonomía de criterio (artículo 2.4).

A la vista de las funciones atribuidas con carácter general a los presidentes y presidentas, y a los secretarios y secretarías de los órganos colegiados, pues, y teniendo en cuenta las funciones que corresponden a la Intervención y a los servicios jurídicos en virtud de sus normas reguladoras, así como la marcada finalidad técnica y la independencia que con su presencia en las mesas de contratación se quiere asegurar, **hay que considerar incompatible el ejercicio de la función interventora y de la función de asesoramiento jurídico con el de cualquier otro cargo o función dentro de las mesas de contratación.** Éste es el sentido, además, que se desprende de la regulación general sobre las mesas de contratación de la LCSP, que separa claramente tres figuras: presidente o presidenta de la mesa, secretario o secretaria (que tiene que ser designado entre funcionarios o funcionarias o, en su defecto, entre personal dependiente del órgano de contratación) y vocales, entre los cuales tiene que figurar necesariamente la persona que lleva a cabo el asesoramiento jurídico y el interventor o interventora.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa formula las siguientes

## CONCLUSIONES

1. **Para la válida constitución de las mesas de contratación hace falta la asistencia del presidente o presidenta, del secretario o secretaria y de los vocales y las vocales correspondientes entre los cuales tienen que figurar un funcionario o funcionaria de entre los que tengan atribuido legal o por reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor o interventora o, a falta de éstos, una persona que tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas al control económico-presupuestario.**
2. **El ejercicio de la función interventora y de la función de asesoramiento jurídico es incompatible con la de cualquier otro cargo o función dentro de las mesas de contratación, de acuerdo con las consideraciones que figuran en el apartado III de este Informe.**

**Barcelona, 7 de julio de 2008.**